



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión número 19/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 25 de mayo de 2006, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que, en el marco de la tramitación del presente procedimiento (expediente de referencia RO 2006/359), se aprueba la siguiente

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONFLICTO DE ACCESO PRESENTADO POR 1.949 ASKARI, S.L. FRENTE A VODAFONE ESPAÑA, S.A. EN RELACIÓN CON LA INTERRUPCIÓN POR ESTA ÚLTIMA EN LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PORTABILIDAD Y LÍNEAS TELEFÓNICAS SOLICITADAS POR LA PRIMERA.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 27 de diciembre de 2005, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ("CMT") escrito de 1.949 Askari, S.L. (en adelante, "Askari"), en virtud del cual se plantea conflicto de acceso frente a Vodafone España, S.A. (en lo sucesivo, "Vodafone"), en relación con determinados problemas surgidos en el seno de la relación contractual existente entre ambos operadores que, según Askari, tiene por objeto la reventa del servicio telefónico móvil de Vodafone por parte de Askari.

En particular, Askari realiza las siguientes alegaciones:

- Que, desde 5 de marzo de 2001, fecha en la que se le otorgó por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información una autorización provisional para la prestación del servicio de reventa del servicio telefónico, *"ha estado prestando un servicio consistente en la reventa a sus clientes de los minutos y líneas contratados con*



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

AIRTEL, actualmente VODAFONE ESPAÑA, S.A. (...), en virtud del contrato suscrito el 15 de noviembre de 2000, refacturando a dichos clientes el tráfico incurrido a las tarifas contratadas, (...)”.

El contrato celebrado entre ambas entidades es un “contrato de servicio digital GSM AIRTEL empresas”, cuyo objeto es la prestación del servicio de telefonía móvil a favor de Askari, sin constar en cláusula alguna la actividad de reventa a que se refiere Askari.

- Que, desde hace más de dos años, Askari trata de negociar con Vodafone una actualización de las tarifas y condiciones aplicables al contrato suscrito, *“con la finalidad de adecuarlas a la realidad del mercado de la telefonía móvil”*, no obstante lo cual se mantienen las mismas tarifas desde la única revisión que se hizo de las mismas en 2002, lo que está causando perjuicios gravísimos a Askari, por la reducción que se produce en su margen de beneficio y la pérdida de competitividad en el mercado y de viabilidad de su negocio.
- Que, más aun, Askari está viendo restringido *“su acceso a la red de Vodafone y al resto de los servicios pactados en el contrato de fecha 15 de septiembre de 2000 en la medida en que Vodafone no ha atendido a las solicitudes de alta del servicio cursadas por ASKARI desde el 20 de septiembre, así como a las solicitudes de portabilidad realizadas desde dicha fecha, ni a las solicitudes de suministro de terminales y tarjetas SIM ni a los cambios de titularidad requeridos (...)*”, aportando al expediente una serie de correos electrónicos dirigidos a personal de Vodafone que, declara Askari, no han sido contestados ni atendidos.
- Askari califica su actividad como de reventa de líneas telefónicas de Vodafone, reclamando la calificación de la relación contractual entre ambas entidades como acuerdo de acceso, y, su solicitud frente a esta Comisión, como conflicto de acceso.
- Finalmente, Askari sostiene que, en virtud de la normativa aplicable y del Informe elaborado por los Servicios de la CMT de 29 de junio de 2005, sobre la definición del mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil, el análisis del mismo, la designación de operadores con poder significativo en el mercado y la propuesta de obligaciones específicas, Vodafone es un operador con poder significativo en el mercado (en lo sucesivo, “PSM”) de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil.

En virtud de tal consideración y de las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

(en adelante, "LGTel") y en su normativa de desarrollo, Askari invoca la exigibilidad de que Vodafone facilite el acceso a su red y servicios, ofrezca precios razonables por la prestación de servicios de acceso y respete el principio de no discriminación en las condiciones de acceso.

Formuladas estas alegaciones, Askari solicita a esta Comisión que proceda a:

"1) Declarar el carácter de revendedor de servicios de telefonía móvil de ASKARI.

Calificar como un acuerdo de acceso a redes la relación contractual existente entre ASKARI y VODAFONE.

Declarar la existencia de un conflicto de acceso a redes entre ASKARI y VODAFONE y, en tal sentido, resolver dicho conflicto adoptando una Resolución por la cual se ordene a VODAFONE a reestablecer el citado acceso y a aplicar a ASKARI unas tarifas y condiciones adecuadas a los requisitos recogidos en la legislación vigente, en particular, en lo relativo a las obligaciones de no discriminación, atención a las solicitudes de acceso a redes y aplicación de precios razonables que se imponen a los operadores con poder significativo, que permitan a ASKARI, en su condición de prestador de servicios de reventa, competir en el mercado obteniendo un margen de beneficio razonable. A estos efectos, entendemos que, al menos, deberían aplicarse a ASKARI las condiciones de cliente final recogidas en el Anexo V al presente documento, reducidas en un importe adecuado para permitir a ASKARI amortizar sus gastos estructurales así como garantizarle la obtención del margen propio de un refacturador de servicios de telefonía móvil.

Asimismo, definir el escenario y los parámetros de negociación y revisión futuras de las tarifas y demás condiciones aplicables por VODAFONE a ASKARI, a las cuales deberá atenerse VODAFONE en sus relaciones con ASKARI, a fin de mantener unas condiciones de acceso a redes adecuadas al mercado y equiparables al resto de clientes de VODAFONE, de tal forma que se permita a ASKARI, en su calidad de refacturador de servicios de telefonía móvil, obtener un margen de beneficio suficiente que le garantice el desarrollo de su actividad en el futuro."

Asimismo, ASKARI solicita de esta Comisión la adopción de las siguientes medidas cautelares:

- "a. Obligar a VODAFONE a dar curso, en un tiempo razonable y en condiciones equivalentes al resto de sus clientes, a las altas solicitadas para nuevos clientes de ASKARI, así como a las solicitudes de nuevas terminales y de cambio de titularidad.*
- b. Mantener los parámetros de portabilidad, servicio de atención al cliente y servicio de postventa en condiciones equivalentes al resto de clientes de VODAFONE."*

SEGUNDO.- Por medio de escrito de fecha 20 de marzo del presente año, se notificó a Vodafone el inicio por Askari del presente procedimiento, dándole traslado del escrito presentado por esta entidad y confiriéndosele un plazo de diez días para que formulara las alegaciones y presentara los documentos que tuviera por conveniente y, en particular, se pronunciase respecto de la medida cautelar solicitada por Askari.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por escrito del Secretario de esta Comisión de 3 de abril, y previa solicitud por Vodafone, se otorgó una ampliación de cinco días sobre el plazo inicialmente conferido.

TERCERO.- Mediante escrito de 4 de abril de 2006, se ha formulado requerimiento a Askari, por ser necesario para la determinación y conocimiento de los hechos a que se refiere en el escrito presentado. Se ha requerido a Askari para que remita a la Comisión la siguiente información:

- *Documentación acreditativa de la relación contractual de Askari con sus clientes (usuarios finales) para la prestación del servicio telefónico móvil con copia, preferentemente, de algunos de los contratos suscritos, con el detalle de la presentación del servicio frente a tales clientes. En particular, interesa conocer a esta Comisión qué responsabilidad tiene Askari frente a tales usuarios: ¿tiene, por ejemplo, Askari, su propio Centro de Atención al cliente? Por el contrario, ¿asume Vodafone alguna relación con tales clientes, que contratan con Askari?*
- *Mayor detalle sobre la restricción de acceso a la red de Vodafone a que se refiere en su escrito, en particular, sobre a que se refiere Askari en su escrito cuando menciona la “aplicación de procedimientos de portabilidad a favor de Askari” (página 4 de su escrito inicial). Se entiende que se trata de solicitudes de portabilidad de clientes de otros operadores a la red de Vodafone. Se precisa en este sentido información precisa acerca de las solicitudes de portabilidad que llevan a cabo los usuarios finales (i.e. copias de algunas solicitudes).*
- *Copia de cualesquiera otras contestaciones remitidas por Vodafone a Askari en relación con la relación contractual mantenida entre ambos, en que reconozca la condición de Askari como revendedor del servicio telefónico móvil o/y por las que rechace las solicitudes de altas o portabilidad presentadas.*
- *Acreditación más precisa de los perjuicios irrogados a Askari que fundan, según dicha entidad, la adopción de medidas provisionales por esta Comisión.”*

CUARTO.- En fecha 10 de abril del año en curso, Vodafone ha presentado escrito de alegaciones en el que afirma, esencialmente, lo siguiente:

- Que el contrato celebrado entre Askari y Vodafone tenía por objeto la prestación del servicio GSM por Vodafone, siendo un contrato de cliente (empresa) habitual, y no un contrato para la prestación del servicio de reventa de líneas telefónicas, y por tanto, no hay conflicto de acceso en el presente caso.
- Que, de otra parte, a la fecha de iniciarse el presente conflicto, Vodafone no ostentaba la condición de operador con PSM en el mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil y, por tanto, son inexigibles las obligaciones aplicables a los operadores con PSM cuyo respeto invoca Askari en su escrito inicial y que han sido definidas con



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

posterioridad por Resolución de esta Comisión de fecha 2 de febrero de 2006.

En este sentido, Vodafone solicita que se desestime en su integridad la solicitud de Askari, *“en la medida en que:*

- *Dicha solicitud se ha producido con anterioridad a que Vodafone fuera declarado operador con poder significativo en el mercado y, por tanto, le fueran exigibles las obligaciones afirmadas por ASKARI, no existiendo, en consecuencia, el conflicto de acceso aludido por ASKARI.*
- *Bajo el nuevo régimen normativo introducido por la Resolución de 2 de febrero de 2006, no se han dado los presupuestos necesarios para que pueda hablarse de un conflicto de acceso (fracaso de una negociación) que justifique la intervención de la Comisión.*
- *La solicitud de ASKARI de 9 de diciembre de 2005 planteando un conflicto de acceso está siendo utilizada por dicho operador con el único objetivo de condicionar y perjudicar la posición negociadora de Vodafone en las negociaciones comerciales que han de tener lugar bajo el nuevo marco y de las que ya se han comenzado a dar los primeros pasos.”*

Asimismo, se solicita que se desestime la solicitud de ASKARI relativa a la existencia de un conflicto de acceso, por infundada y extemporánea, y que se desestime la solicitud de Askari de medidas cautelares, *“al no existir ninguna razón que justifique su adopción”*.

QUINTO.- De otra parte, en fecha 13 de abril del presente año, ha tenido entrada en el Registro de esta Comisión escrito de Askari por el que contesta al requerimiento practicado. En particular, Askari aporta lo siguiente:

- Copia de contratos suscritos entre Askari y sus clientes finales para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
- Copia de comunicaciones entre usuarios finales del servicio telefónico y Askari, prestador de un servicio de atención al cliente, sosteniéndose por Askari que la prestación de tal servicio la desempeña en exclusiva Askari, no manteniendo sus clientes ningún contacto con Vodafone.
- Documentación relativa a la tramitación de solicitudes de portabilidad gestionadas por Askari, que se realizan a su nombre, actuando por cuenta de sus clientes.
- Asimismo, manifiesta que Vodafone no ha reconocido expresamente la condición de Askari como revendedor de servicios de telefonía móvil pero se aportan copias de correos electrónicos en los que se reflejan las comunicaciones entre el personal de ambas entidades y el conocimiento de la actividad por Vodafone llevada a cabo por Askari.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

De otra parte, en relación con los perjuicios irrogados hasta la fecha, Askari incide en que desde el inicio del conflicto *“VODAFONE ha continuado incumpliendo sus obligaciones contractuales”*. Así, *“VODAFONE no contesta a ningún requerimiento de alta o portabilidad realizado por ASKARI desde el día 20 de septiembre de 2005”, ni atiende a las solicitudes de terminales y tarjetas SIM*, por lo que está sufriendo graves perjuicios económicos y estratégicos en su negocio que:

“(…) impide a ésta [Askari] ofrecer a sus clientes unos precios competitivos en el mercado, lo cual está provocando que los clientes de ASKARI se estén dando de baja de sus respectivos contratos con dicha sociedad y que no se logre la captación de nuevos clientes, (...). En este sentido, cabe destacar que en el primer trimestre de 2006 las bajas de clientes ya duplican a las altas, (...)”.

En fin, Askari amplía su solicitud de medidas cautelares, solicitando a esta Comisión que se obligue a Vodafone, *“en su calidad de operador dominante, a establecer unas tarifas aplicables a ASKARI equivalentes al resto de revendedores de telefonía móvil o, subsidiariamente, al resto de sus clientes con consumos equiparables a los de ASKARI, que permitan a ésta continuar prestando servicio a sus clientes en tanto no se resuelva el presente conflicto”*.

A los anteriores Antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habilitación competencial para conocer del conflicto formulado.

I.1.- Objeto del presente procedimiento.

Askari ha formulado conflicto de acceso frente a Vodafone con fundamento en la interrupción por parte de este último operador de la prestación de algunos de los servicios que venía garantizando al amparo del contrato firmado en fecha 15 de noviembre de 2000, contrato que, por la práctica de las relaciones mantenidas entre ambas entidades durante estos años y como se analizará *infra*, ampara la reventa de líneas telefónicas titularidad de Vodafone por Askari a sus clientes propios.

El objeto del presente procedimiento es determinar si dicha interrupción de servicios por parte de Vodafone es conforme a Derecho, en el marco del acuerdo de acceso ejecutado por Vodafone y Askari estos años, y resolver asimismo sobre la conformidad o no a Derecho de las demás pretensiones



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

invocadas por esta última entidad, en relación con las condiciones y tarifas a aplicar por Vodafone en su relación contractual con Askari y al escenario y parámetros de negociación entre ambas entidades, tal como solicita Askari en su escrito.

I.2.- **Habilitación competencial para conocer conflictos de acceso.**

El artículo 48.2 de la LGTel determina cuál es el objeto que tiene este organismo público que, entre otros aspectos, alcanza a la resolución de los conflictos que se produzcan entre los operadores:

“La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá por objeto el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos.”

En relación con este objeto, y en lo que afecta a las materias de telecomunicaciones reguladas en la LGTel, el artículo 48.3.d) de la misma atribuye a la CMT la siguiente función:

*“La resolución vinculante de los **conflictos que se susciten entre los operadores en materia de acceso** e interconexión de redes, en los términos que se establecen en el título II de esta Ley, así como en materias relacionadas con las guías telefónicas, la financiación del servicio universal y el uso compartido de infraestructuras. (...)”*

El Título II de la LGTel viene rubricado con el título “*Explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia*”. A su vez, el Capítulo III de dicho título se refiere al “*Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión*”. Interesa recordar el ámbito de aplicación de este capítulo. Así, el artículo 11.1 de la LGTel señala:

“Este capítulo y su desarrollo reglamentario serán aplicables a la interconexión y a los accesos a redes públicas de comunicaciones electrónicas y a sus recursos asociados, salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario final”.

Más aun, en relación con los conflictos que se puedan producir en las relaciones entre operadores, el artículo 11.4 de la LGTel señala que:

“La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá intervenir en las relaciones entre operadores, a petición de cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, así como la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3”.

En fin, el artículo 14 del mismo texto legal preceptúa lo siguiente:



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

“De los conflictos en materia de obligaciones de interconexión y acceso derivadas de esta Ley y de sus normas de desarrollo conocerá la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. (...)”

Por su parte, el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por el Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre (en lo sucesivo, “Reglamento de Mercados”), reitera los anteriores principios y añade:

“Artículo 22. Principios generales.

1. Las disposiciones de este título, relativas a la interconexión y a los accesos a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y a sus recursos asociados, se entenderán aplicables a todos los operadores de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas. (...)”

“Artículo 23. Competencias en materia de acceso e interconexión y condiciones aplicables.

(...) 3. Por su parte, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá atribuidas las competencias siguientes:

- a) Podrá intervenir en las relaciones entre operadores, a petición de cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado.*
- b) Conocerá de los conflictos en materia de obligaciones de interconexión y acceso derivadas de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de este Reglamento y de otras normas de desarrollo de la citada Ley; a tal efecto, dictará una resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto y las medidas provisionales que correspondan. (...)”*

Pues bien, se ha de recordar, en primer término, el concepto de “acceso” contenido en el Anexo II, apartado 2, de la LGTel:

“Acceso: la puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas”.

Dicho concepto de acceso es incorporado a nuestra normativa nacional en términos idénticos a los definidos en la Directiva 2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión (Directiva de acceso), en su artículo 2, apartado a), y cuyo artículo 1.2 señala que la Directiva citada *“define los derechos y las obligaciones de los operadores y de las empresas que deseen interconectarse y/o acceder a sus redes o recursos asociados”.*

De otra parte, en relación con la exclusión de los beneficiarios que sean usuarios finales que lleva a cabo el artículo 11.1 de la LGTel, se ha de estar al Anexo II, apartado 35, del mismo texto legal, que define “usuario final” como:



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

“Usuario final: el usuario que no explota redes públicas de comunicaciones ni presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público ni tampoco los revende”.

Con este último inciso la propia LGTel está caracterizando la actividad de reventa como un servicio incompatible con la naturaleza de “*usuario final*”, como persona física o jurídica que únicamente utiliza, para si misma, los servicios de comunicaciones prestados.

En conclusión, esta Comisión es competente para conocer de los conflictos en materia de acceso a redes públicas de comunicaciones electrónicas que se planteen entre operadores de red entre sí o entre operadores y empresas que deseen acceder a sus redes y servicios en determinadas condiciones, entendido el acceso como la puesta a disposición de la red o de los servicios prestados, salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario final, en los términos definidos por el artículo 11 y el Anexo II de la LGTel, lo que incluye los supuestos de reventa en el ámbito de aplicación del Capítulo III del Título II de la LGTel, dedicado al *Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión*.

I.3.- Sobre la relación contractual entre Askari y Vodafone.

Tal y como se ha señalado en sede de Antecedentes, Askari sostiene que, desde que obtuvo la autorización provisional para prestar el servicio de reventa del servicio telefónico móvil, ha prestado dicho servicio sobre la base del contrato celebrado con Vodafone en fecha 15 de noviembre de 2000.

Vodafone, de contrario, señala que el contrato citado tenía por objeto la prestación del servicio GSM por Vodafone, siendo un contrato de cliente (empresa) habitual, y no un contrato para la prestación del servicio de reventa de líneas telefónicas, y que, en consecuencia, no hay conflicto de acceso en el presente caso.

Sin embargo, los siguientes aspectos revelan que la relación contractual desarrollada desde el año 2000 y respetada por ambas partes hasta septiembre de 2005, en que, sin un motivo expreso, Vodafone deja de atender las solicitudes dirigidas por Askari en orden a tramitar la portabilidad de clientes de esta última entidad, es de reventa de líneas telefónicas de Vodafone:

- En fecha 25 de septiembre de 2000, Askari solicitó una autorización provisional para la prestación del servicio de reventa del servicio telefónico, autorización que fue otorgada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por Resolución de 5 de marzo de 2001.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Vodafone y Askari celebran, el día 15 de noviembre de 2000, un “contrato de servicio digital GSM AIRTEL empresas”, por el que Vodafone se comprometía a prestar servicios de telefonía móvil para empresas a Askari.

No obstante Askari obtiene la autorización provisional para la prestación del servicio de reventa del servicio telefónico móvil con posterioridad (cuatro meses más tarde), el objeto social de Askari señalado por el artículo 2 de sus Estatutos sociales, protocolizados por escritura pública de constitución de 25 de julio de 2000, con número 3.291, consiste principalmente en:

“A) La realización de cualquier tipo de operación de telefonía móvil o fija, así como de transmisión de datos por cualquier tipo de sistema actualmente existente, o que pueda crearse en el futuro, contratando con cualquier tipo de operador autorizado existente, tanto en España como en el extranjero, así como la reventa de líneas telefónicas y de minutaje a terceros, mediante la correspondiente refacturación.”

Siendo tal el objeto social de Askari, más la prestación accesoria de servicios de asesoramiento a terceros respecto de la aplicación de sistemas de telecomunicaciones, y ante las solicitudes tan elevadas de portabilidad de números a favor de Askari, no puede sostenerse que Vodafone desconociese la actividad llevada a cabo por Askari desde su mismo inicio.

- Más aun, Askari ha aportado al presente expediente, como Anexo VI que acompaña a su escrito inicial presentado el día 27 de diciembre de 2005, copia de correos electrónicos remitidos desde febrero de 2005 a dos direcciones distintas de correo electrónico de personal de Vodafone, por los que se solicita la portabilidad de números o líneas telefónicas y de terminales de clientes de Askari a Vodafone, en algunos casos refiriéndose la persona remitente (Dña. Juana Ferriol) a retrasos de dos o tres meses en atender dichas solicitudes y en otros reiterándose las mismas solicitudes y refiriéndose la persona citada a quejas constantes de clientes.

Asimismo, Askari acompaña a su escrito, como Anexo VIII, copia de correos electrónicos enviados a personal de Vodafone a lo largo del año 2004, conteniendo solicitudes similares.

A dichas comunicaciones Vodafone, o no contesta, o contesta que serán atendidas, o en algún supuesto concreto, se señala que las portabilidades solicitadas se están cambiando a otros números, tratándose, en fin, de relaciones comerciales en las que no parece haber divergencia entre las contratantes en la actividad prestada. En ningún caso Vodafone ha intentado resolver el contrato celebrado entre ambas entidades en noviembre de 2000 por incumplimiento del mismo por parte de Askari.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En relación con tales conductas, Askari manifiesta en su escrito que Vodafone está restringiendo el acceso de Askari a su red y a los demás servicios pactados, *“en la medida en que no cursa las solicitudes de alta del servicio de ASKARI, no atiende las solicitudes de portabilidad, ni las solicitudes de suministro de terminales y tarjetas SIM, ni los cambios de titularidad requeridos por ASKARI, (...)”*. Si bien no se trata de servicios pactados a la luz de los términos literales del contrato aportado por las partes, de noviembre de 2000, sí parece tratarse de servicios que han estado prestándose de manera pacífica por parte de Vodafone durante estos años.

- En contestación al requerimiento al que se hacía referencia en el Antecedente de hecho Tercero, Askari ha aportado copia de la siguiente documentación e información:
 - a) Contratos celebrados por Askari con usuarios finales, para la prestación de servicios de telecomunicaciones, donde se hace alusión (en las Condiciones generales) a la entrega por Askari al cliente de una tarjeta SIM y de terminal o terminales, y en donde no se hace referencia alguna a Vodafone.
 - b) Correos electrónicos y comunicaciones por fax dirigidos por terceros (clientes de Askari) a esta última entidad, por los que se solicitan bajas o altas de líneas u otros servicios que, según Askari, se formulan ante el Servicio de Atención al Cliente de esta compañía.

A este respecto, dichos clientes tienen una relación contractual directa y única con Askari, responsable de gestionar las numeraciones afectadas, y no con Vodafone.

- c) Solicitudes de portabilidad de numeración móvil a favor de Vodafone, consignándose como titular de los números a Askari, que los gestiona en nombre de sus clientes. Asimismo, se acompañan faxes de confirmación de la activación de la portabilidad de números remitidos por Vodafone, en los que consta el logotipo de esta entidad y se solicita expresamente que para la remisión de cierta información necesaria se contacte directamente con Askari.

En este sentido, en el escrito de Askari del pasado 12 de abril del año en curso, se señala que Vodafone ha tramitado hasta la fecha [CONFIDENCIAL] portabilidades desde el inicio de la relación contractual, [CONFIDENCIAL].



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En definitiva, resulta evidente que Vodafone permitía y colaboraba con Askari en su actividad, con independencia del tenor literal del contrato firmado en noviembre de 2000. Y, acudiendo a las reglas de interpretación aplicables a los contratos mercantiles, ha de estarse a las actuaciones de las partes, conforme al artículo 1.282 del Código Civil, que señala que *“para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”*.

Así, ha de inferirse la voluntad contractual de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, como afirma la jurisprudencia. Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (**Sentencias de 20 de febrero de 1947 o de 30 de septiembre de 1991**, entre otras) la de que la naturaleza de un negocio jurídico depende de la intención de los contratantes y de las declaraciones de voluntad que lo integran y no de la denominación que le hayan atribuido las partes, siendo el contenido real del contrato el que determina su calificación, lo que conduce a esta Comisión a entender, por el análisis de las prestaciones entre las partes, que durante estos años se ha celebrado un acuerdo de acceso a redes o servicios de Vodafone.

I.4.- Conclusión.

En definitiva, esta Comisión resulta competente para conocer del presente conflicto de acceso instado por Askari, para determinar si la interrupción del servicio prestado hasta ahora por Vodafone se ajusta a Derecho y analizar las condiciones u obligaciones que, desde el punto de vista de la normativa sectorial de comunicaciones electrónicas, pueden establecerse a la luz de la solicitud de intervención formulada por Askari, tal como se señala en el apartado I.1.

SEGUNDO.- Habilitación competencial para la adopción de medidas cautelares.

De conformidad con el artículo 48.12 de la LGTel,

“En el ejercicio de sus funciones, y en los términos que reglamentariamente se determinen, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, una vez iniciado el procedimiento correspondiente, podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, adoptar las medidas cautelares que estime oportunas para asegurar la eficacia del laudo o de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello”.

La propia LGTel contempla, de forma específica, esta habilitación dada a la CMT para adoptar medidas cautelares con ocasión del ejercicio de sus funciones relativas a la resolución de conflictos de acceso. En el artículo 14.1 de esta Ley, antes citado, se indica que:



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*“Ésta [la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones], previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo máximo de cuatro meses a partir del momento en que se pida su intervención, **sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva**”.*

Por su parte, el artículo 31 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado mediante Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre (en adelante, “RCMT”), habilita a esta Comisión para, en el ejercicio de sus funciones, adoptar de oficio o a instancia de los interesados, una vez iniciado el correspondiente procedimiento, *“las medidas cautelares que estime oportunas para asegurar la eficacia (...) de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello”.*

Según el mismo artículo 31 del RCMT, dichas medidas cautelares podrán consistir en órdenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que se refiere el procedimiento o en la imposición de fianza de cualquier clase, excepto la personal, que sea bastante para responder de la indemnización de los daños y perjuicios que se pudieran causar.

Por último, el citado artículo 31 impide dictar medidas cautelares que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

De acuerdo con los artículos 48.1 de la LGTel y 2 del RCMT, esta Comisión, en el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, adecuará sus actuaciones a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, “LRJPAC”). Así, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 72 de la citada LRJPAC, *“iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello”.*

En definitiva, esta Comisión está habilitada para adoptar medidas cautelares en los procedimientos que tienen por objeto la resolución de conflictos de acceso entre operadores.

La presente medida cautelar se adopta una vez iniciado el procedimiento, y previa audiencia de los interesados.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

TERCERO.- Concurrencia de los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar instada.

De conformidad con el artículo 72.1 de la LRJPAC, el órgano competente para resolver el procedimiento podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas cuando ello sea necesario para *“asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer”* y *“si existen elementos de juicio suficientes para ello”*. Según el apartado 3 del mismo precepto, *“no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de imposible o difícil reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes”*.

La doctrina y jurisprudencia han sistematizado los presupuestos necesarios para obtener la tutela cautelar. Tales requisitos son básicamente los siguientes:

- La existencia de apariencia de buen derecho (*“fumus boni iuris”*) o de elementos de juicio suficientes para adoptar la medida.
- Previsión razonable de la necesidad y urgencia de la medida (*“periculum in mora”*) para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
- La inexistencia de perjuicios de difícil o imposible reparación para los interesados o de efectos que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Es necesario que la medida a adoptar sea proporcional e idónea en la ponderación necesaria que hace la Administración entre el interés público que trata de satisfacer la actuación administrativa y los posibles perjuicios que se irroguen a los afectados por la misma.

El Tribunal Constitucional ha interpretado el régimen de adopción de medidas cautelares indicando que no se produce vulneración de derechos constitucionales siempre que exista una norma jurídica que permita su adopción, se adopten las medidas cautelares por resolución en Derecho y se basen en un juicio de razonabilidad en cuanto a la finalidad perseguida y circunstancias concurrentes (STC 31/1981, de 28 de julio; 13/1982, de 1 de abril; 66/1984 y 108/1984, de 26 de noviembre y 22/1985, de 15 de febrero).

Se examina a continuación la concurrencia, con relación a la medida cautelar solicitada por Askari, de los requisitos anteriores.

III.1.- Apariencia de buen derecho.

Con esta expresión se alude a la verosimilitud o apariencia de que el Derecho asiste al eventual beneficiario de la medida, de manera que la Administración



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

lleva a cabo un ejercicio de predicción sobre la pretensión de fondo, debiendo tomarse en todo caso con mucha cautela dicho presupuesto, pues no se trata de conocer sobre el fondo del asunto, tal y como se ha pronunciado en sucesivas ocasiones la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, **STS de 27 de febrero de 2001, Ar. 1374, ATS de 16 de octubre de 2000, Ar. 9738**).

Del análisis preliminar llevado a cabo por esta Comisión y de la información aportada por las partes en el seno del presente expediente, se desprende que Askari ha estado prestando servicios de reventa del servicio telefónico móvil de Vodafone sobre la base de un contrato que tenía un objeto distinto, pero de forma tácitamente acordada con Vodafone desde el año 2000, toda vez que esta entidad ha estado autorizando las solicitudes de portabilidad a su favor presentadas por Askari en nombre de sus clientes.

Desde septiembre de 2005, según la información y documentación aportadas por Askari, Vodafone ha dejado de atender las solicitudes de nuevas líneas y terminales remitidas por aquella, infligiéndose con ello perjuicios a los clientes de Askari. Vodafone no ha resuelto el contrato celebrado entre ambas ni ha interrumpido la prestación del servicio telefónico móvil a Askari, según consta a esta Comisión, limitándose a interrumpir el suministro de servicios de alta de líneas y nuevos terminales y gestión de solicitudes de portabilidad de antiguos y nuevos clientes, al no contestar a las solicitudes de Askari.

A este respecto, en su escrito de alegaciones presentado el pasado día 10 de abril, Vodafone no alude a los motivos de ese cambio de actitud frente a Askari, ni lleva a cabo alegación alguna sobre su falta de respuesta, refiriéndose únicamente a lo siguiente:

- A que el objeto del contrato celebrado era la prestación del servicio telefónico a Askari, *“sin que exista en el mismo ninguna condición ni obligación que desvirtúe tal naturaleza”*.
- En segundo lugar, a que Vodafone no tenía, en el momento de iniciarse el presente conflicto, la condición de operador con PSM en el mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil.

Sin embargo, Vodafone olvida los siguientes aspectos:

- a) No obstante los términos literales del contrato celebrado en noviembre de 2000 y las declaraciones efectuadas por Vodafone, de las comunicaciones y relaciones comerciales mantenidas entre Askari y Vodafone se desprende de forma evidente que ambas entidades colaboraban para la prestación, por Askari, del servicio de reventa de líneas telefónicas de Vodafone.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por ello, tal como se señalaba con anterioridad, ha de estarse al artículo 1.282 del Código Civil, que señala que *“para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”*, infiriéndose que la voluntad contractual era la prestación de tales servicios de comunicaciones electrónicas, conforme a las circunstancias concurrentes y la total conducta de los interesados, como afirma la jurisprudencia.

Así, deben analizarse los derechos y obligaciones de las partes y, sobretodo, los derechos afectados por el corte del suministro de los servicios de acceso prestados por Vodafone. Así, debe tenerse en consideración que:

- Los clientes de Askari únicamente tenían una relación contractual con esta entidad, no con Vodafone. Así, Askari mantenía su propio servicio de atención al cliente en relación con tales clientes. A este respecto, Askari ha aportado copia de correos electrónicos y faxes dirigidos por clientes a dicho servicio de atención al cliente así como copia de contratos suscritos con tales clientes por parte de Askari.
- Askari tramitaba frente a Vodafone las solicitudes de portabilidad de números actuando por cuenta de sus clientes, tal y como ha sido acreditado a través de la documentación aportada. De esta forma, Askari señala en su escrito de 12 de abril que Vodafone ha tramitado hasta la fecha 970 portabilidades. Se reitera que la entidad encargada de tales cambios de operador y de atender los problemas que les surjan a los clientes con posterioridad es Askari.
- Askari ha aportado copia de correos electrónicos y faxes que prueban que Vodafone conocía y facilitaba la prestación de tales servicios por Vodafone, activando la portabilidad de los números solicitados por Askari.
- Conforme señala Askari en sus escritos de alegaciones, tiene en la actualidad unas 5.000 líneas activas (teniendo 13 empleados).
- Askari ha constituido estos últimos años un aval a favor de Vodafone por importe anual de 60.000 euros, cuando el contrato suscrito entre las partes señalaba que Vodafone podría exigir una garantía con un límite máximo de 1.000.000 de pesetas (6.000 euros), no señalando las condiciones generales de contratación de servicios de telecomunicaciones móviles para empresas ninguna cantidad específica.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- b) A priori, es certero el análisis que lleva Vodafone del estado de la definición de los mercados de referencia a que alude el artículo 10 de la LGTel a fecha de presentación de la solicitud de Askari, esto es, 27 de diciembre de 2005.

En efecto, en dicha fecha esta Comisión no había finalizado su análisis del mercado número 15 de la Recomendación de la Comisión de 11 de febrero de 2003, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva Marco.

De conformidad con lo previsto en dicha Recomendación, la CMT inició, en fecha 7 de julio de 2005, el procedimiento para la definición y análisis del mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil, la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, así como la apertura del trámite de información pública y la solicitud de informe al Servicio de Defensa de la Competencia (expediente AEM 2005/933), en el que ha recaído Resolución en fecha 2 de febrero de 2006, declarándose a Vodafone operador con PSM en el citado mercado e imponiéndosele una serie de obligaciones o condiciones genéricas.

El 27 de diciembre de 2005 era plenamente de aplicación la Disposición transitoria primera, apartado 3, primer párrafo, de la LGTel, cuyo tenor literal señala:

“3. Los mercados de referencia actualmente existentes, los operadores dominantes en dichos mercados y las obligaciones que tienen impuestas dichos operadores continuarán en vigor hasta que, en los términos fijados en el título II, se fijen los nuevos mercados de referencia, las empresas con poder significativo en dichos mercados y sus obligaciones. (...)”

Por tanto, en aquel momento había de estarse a la declaración de operadores dominantes y a las obligaciones impuestas sobre los mismos, definidos conforme a la anterior Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, y al Reglamento que desarrollaba el Título II de aquella Ley, en lo relativo a la interconexión y al acceso a las redes públicas y a la numeración, aprobado por Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio.

Sin embargo, lo relevante a los efectos de la adopción de la presente Resolución es que Askari y Vodafone tenían suscrito un acuerdo de acceso tácito y que en una fecha determinada Vodafone dejó de suministrar ciertos servicios que venía garantizando de forma pacífica, y ello sin un motivo



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

lícito o, por lo menos, expreso, pudiéndose causar con ello graves perjuicios no sólo a Askari, sino a sus clientes finales. Debe recordarse que Vodafone era operador dominante en el mercado nacional de la telefonía móvil automática desde 2001 (siendo la última declaración de septiembre de 2003¹), declaración que le sujetaba a la observancia de una serie de obligaciones, entre las que se encontraban las del artículo 9.1 del antiguo Reglamento de Interconexión, aprobado por el Real Decreto 1651/1998 anteriormente citado, y los artículos 24 y 34 de la hoy derogada LGTel (relativos, entre otros, a la obligación de garantizar el acceso en condiciones objetivas y transparentes).

III.2.- Necesidad y urgencia de la medida.

Es preciso que la adopción de la medida cautelar sea necesaria para asegurar la eficacia de la posible resolución a adoptar, esto es, que el ritmo del proceso no perjudique fatalmente a quien acude al mismo solicitando tutela judicial. Concorre el segundo presupuesto para la adopción de la medida, toda vez que en el supuesto de no adoptarse la medida cautelar, los perjuicios que pudieran irrogarse a Askari serían de difícil o imposible reparación.

Askari ha aportado, junto con sus escritos, documentación en la que acredita las quejas y reclamaciones de sus clientes, al verse inatendidas sus solicitudes de nuevas líneas telefónicas y terminales, o de cambios de portabilidad a Vodafone:

- c) Como Anexo IV a su escrito presentado el pasado 13 de abril, Askari ha aportado copias de correos electrónicos remitidos a Vodafone solicitando nuevos servicios que, según las declaraciones de Askari, no han sido atendidas.
- d) En el Anexo V a dicho escrito, figuran comunicaciones de clientes de Askari a esta entidad dando de baja servicios por motivos relacionados con las tarifas y por la demora en atender servicios.

Así, en un supuesto concreto, un cliente, tras notificar a Askari su *“descontento por la larga espera a la que nos estáis sometiendo para el suministro de las nuevas líneas solicitadas junto a los terminales correspondientes”* en junio de 2005, resuelve el contrato con Askari en septiembre del mismo año.

- e) Finalmente, es llamativo el dato del número de portabilidades tramitadas desde el inicio de la relación comercial con Vodafone: [CONFIDENCIAL].

¹ Resolución de 11 de septiembre de 2003 (exp. OM 2003/465).



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Resulta necesaria, en consecuencia, la adopción de la presente medida cautelar, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Esta Comisión entiende necesario que Vodafone siga atendiendo las solicitudes de nuevas líneas telefónicas y/o terminales presentadas por Askari en las condiciones económicas pactadas entre las partes y en vigor en el momento de plantearse el presente conflicto.

III.3.- Idoneidad de la medida *versus* interés público a ponderar.

Tal y como se ha señalado en sede de Antecedentes de hecho, ASKARI ha solicitado de esta Comisión la adopción de las siguientes medidas cautelares:

- “a. Obligar a VODAFONE a dar curso, en un tiempo razonable y en condiciones equivalentes al resto de sus clientes, a las altas solicitadas para nuevos clientes de ASKARI, así como a las solicitudes de nuevas terminales y de cambio de titularidad.*
- b. Mantener los parámetros de portabilidad, servicio de atención al cliente y servicio de postventa en condiciones equivalentes al resto de clientes de VODAFONE.”*

La medida cautelar que se adopta por medio de la presente Resolución tiene por objeto el mantenimiento de los servicios prestados por Vodafone a favor de los clientes de Askari, frente a los que esta última entidad ha asumido una serie de obligaciones en el marco de los contratos firmados con los mismos. La medida resulta idónea para el objetivo perseguido: evitar perjuicios irreparables a Askari (principalmente, su imagen frente a los usuarios finales) y a sus clientes.

No obstante lo anterior, esta Comisión no puede otorgar la pretensión de tutela cautelar solicitada por Askari de que Vodafone mantenga los parámetros de portabilidad, servicio de atención al cliente y servicio de postventa en condiciones equivalentes al resto de clientes de Vodafone y que se establezcan tarifas equivalentes al resto de revendedores de telefonía móvil. Ha de recordarse que actualmente se encuentra derogada en su totalidad la declaración de operadores dominantes del anterior marco normativo y entre las obligaciones aplicables a Vodafone como operador con PSM en el mercado de acceso y originación de llamadas en redes públicas de telefonía móvil, definidas por Resolución de 2 de febrero de 2006, no se encuentra la de no discriminación, sino únicamente las de *“atender a solicitudes razonables de acceso y “ofrecer precios razonables por la prestación de servicios de acceso”*.

Más aun, en principio y sin perjuicio de lo que se dirá en la Resolución del presente conflicto, ha de recordarse que las condiciones y tarifas que rijan la relación contractual entre las partes deberán ser acordadas por las mismas sobre la base de la negociación, siendo la intervención de la CMT residual a



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

estos efectos en la medida en que únicamente intervendrá en el caso de que no se llegue a un acuerdo voluntario de acceso. En consecuencia, no resulta procedente alterar, previamente a una eventual negociación entre las partes, las previsiones contractuales existentes.

Vodafone, que defiende la improcedencia de la adopción de la medida cautelar instada de contrario, señala, en la Alegación Cuarta de su escrito de 10 de abril, que la solicitud de Askari tiene por objeto la obtención de condiciones no previstas por el contrato suscrito en su día con esta entidad y situar a Vodafone en una posición negociadora desventajosa. Sin embargo, con la medida cautelar adoptada por esta Resolución, no se modifican las condiciones que venía garantizando Vodafone a Askari en el marco de su relación contractual sino que únicamente se garantiza la continuidad de la prestación de los servicios a los usuarios.

La medida que se acuerda por medio de la presente Resolución no viola derechos amparados por las leyes ni ocasiona perjuicios de imposible o difícil reparación.

Al contrario, se protegen los derechos de los usuarios finales, clientes de Askari. En este sentido, el artículo 11.4 de la LGTel señala que la CMT podrá intervenir en las relaciones entre operadores, *“con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, así como la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3”*, entre los que se encuentra el de defensa de los intereses de los usuarios (art. 3.e) de la LGTel).

Y, finalmente, tampoco se ocasionan perjuicios de difícil o imposible reparación, pues se trata de seguir prestando unos servicios que se desarrollaban hasta ahora entre las partes, recibéndose una contraprestación por los servicios prestados y, en todo caso, de haberlos, tales perjuicios serían de tipo económico, siendo, por tanto, fácilmente reparables.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

RESUELVE

ÚNICO.- Adoptar, en el seno del presente procedimiento, la medida cautelar consistente en que Vodafone España, S.A. atienda las solicitudes de portabilidad y de nuevos servicios o modificaciones de los mismos solicitados



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

por 1.949 Askari, S.L., de forma idéntica a como viniera prestando tales servicios a esta última entidad.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo dispuesto en el número dos del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera